

El ciclo de vida de las coaliciones presidenciales en América Latina.

Introducción

En las últimas tres décadas, el estudio de las coaliciones presidenciales en América Latina ha pasado de ocupar un lugar marginal en la literatura comparada a convertirse en uno de los ejes centrales del análisis institucional de la región. Si durante mucho tiempo el presidencialismo fue interpretado como un arreglo institucional poco compatible con gobiernos multipartidarios estables —una tensión tempranamente señalada por Mainwaring (1993)—, la evidencia acumulada desde la década de 1990 mostró que la formación de coaliciones no constituye una anomalía sino una práctica recurrente en sistemas presidenciales fragmentados. El llamado “presidencialismo coalicional”, conceptualizado inicialmente a partir del caso brasileño (Abranches 1988; Amorim Neto 2006), dejó de ser una excepción empírica para convertirse en una característica extendida de la política latinoamericana contemporánea (Chaisty, Cheeseman y Power 2018, 2021).

Sin embargo, aunque el fenómeno ha sido ampliamente estudiado, la literatura presenta una marcada segmentación analítica. Los trabajos sobre formación de coaliciones —centrados en incentivos institucionales, distribución de carteras y disciplina legislativa (Amorim Neto 2006; Cheibub 2007)— se desarrollaron en gran medida separados de los estudios sobre gobernanza intracoalición, orientados a problemas de delegación y control (Raile, Pereira y Power 2011; Inácio y Llanos 2016). A su vez, ambos campos dialogaron sólo parcialmente con la literatura sobre estabilidad presidencial, crisis ejecutivas e interrupciones democráticas (Pérez-Liñán 2007; Hochstetler 2006). Como resultado, el conocimiento acumulado se encuentra disperso en subcampos que rara vez son integrados en una misma arquitectura conceptual.

Este capítulo propone organizar el estado del conocimiento sobre las coaliciones presidenciales en América Latina en torno a un enfoque secuencial: el ciclo de vida coalicional. Siguiendo una lógica similar a la utilizada en estudios sobre gobiernos parlamentarios (Strøm, Müller y Bergman 2008; Bergman, Bäck y Hellström 2021), distinguimos tres etapas analíticamente diferenciables, pero empíricamente interdependientes: (1) la formación de la coalición, (2) su funcionamiento o gobernanza, y (3) su terminación o supervivencia. El supuesto central es que cada etapa condiciona a

las siguientes: la manera en que una coalición se configura en su nacimiento afecta sus mecanismos internos de coordinación, y estos, a su vez, inciden sobre su duración y estabilidad.

Adoptar una perspectiva de ciclo de vida tiene varias ventajas analíticas. En primer lugar, permite integrar literaturas que tradicionalmente han evolucionado por separado. En segundo lugar, obliga a conceptualizar las coaliciones no como eventos puntuales —el acto de repartir ministerios tras una elección— sino como arreglos políticos dinámicos que enfrentan tensiones permanentes entre cooperación y competencia (Bergman et al. 2013)¹. Finalmente, esta perspectiva facilita la comparación con estudios parlamentarios, al tiempo que subraya las especificidades institucionales del presidencialismo.

La especificidad más importante radica en que, a diferencia de los regímenes parlamentarios, en los sistemas presidenciales la ruptura de una coalición no implica necesariamente la caída del gobierno. Un presidente puede perder socios ministeriales, reconfigurar su gabinete o incluso gobernar en minoría sin abandonar el cargo. Esta característica ha sido subrayada por Cheibub (2007), quien mostró que los gobiernos minoritarios no son intrínsecamente inestables en el presidencialismo, y por Chaisty, Cheeseman y Power (2018), quienes argumentan que los presidentes despliegan un conjunto de herramientas institucionales para sostener la cooperación aun en condiciones adversas. En consecuencia, la estabilidad presidencial y la estabilidad coalicional deben ser analíticamente distinguidas.

La Tabla 1 organiza la literatura sobre coaliciones presidenciales en América Latina en torno a tres conjuntos de preguntas correspondientes a cada una de las etapas del ciclo de vida coalicional.

¹ El concepto de “ciclo de vida de las coaliciones” proviene de la literatura sobre gobiernos parlamentarios, donde se ha utilizado para estructurar el análisis en torno a tres etapas principales: formación, gobernanza y terminación de los gobiernos (Strøm, Müller y Bergman 2008; Bergman, Bäck y Hellström 2021). En sistemas parlamentarios, estas etapas se encuentran estrechamente vinculadas, dado que la ruptura de la coalición suele implicar la caída del gabinete. En sistemas presidenciales, en cambio, la continuidad del Ejecutivo no depende directamente de la cohesión coalicional. Como consecuencia, la “terminación” de la coalición no necesariamente coincide con la salida del presidente del cargo, sino que puede adoptar formas intermedias como la salida de socios del gabinete, la reconfiguración parcial de alianzas o el tránsito hacia gobiernos minoritarios. No obstante, estas diferencias institucionales, la perspectiva del ciclo de vida resulta analíticamente útil porque permite integrar literaturas que tradicionalmente han sido tratadas de forma separada —formación de coaliciones, gobernanza intracoalición y estabilidad presidencial— dentro de una misma secuencia explicativa.

Tabla 1. El ciclo de vida de las coaliciones presidenciales: principales preguntas y literatura

Etapas del ciclo	Pregunta central	Mecanismos explicativos	Autores
Formación de coaliciones	¿Por qué los presidentes incorporan partidos al gabinete?	Fragmentación legislativa; necesidad de mayorías; incentivos de acceso a cargos; proximidad ideológica	Mainwaring (1993); Amorim Neto (2006); Cheibub (2007); Chasquetti (2001, 2008); Chaisty et al. (2018, 2021)
	¿Qué tipo de coaliciones se forman?	Mayorías vs minorías; coaliciones mínimas vs sobredimensionadas; coaliciones preelectorales vs postelectorales	Alemán y Tsebelis (2011); Negretto (2006); Chaisty et al. (2018)
	¿Cómo se distribuyen los recursos dentro de la coalición?	Distribución proporcional de ministerios; importancia estratégica de carteras; patronazgo y recursos presupuestarios	Amorim Neto (2006); Batista (2018); Raile, Pereira y Power (2011)
Gobernanza de la coalición	¿Cómo se coordinan los partidos dentro del Ejecutivo?	Delegación ministerial; mecanismos de coordinación interpartidaria; centralización en la presidencia	Laver y Shepsle (1996); Müller y Strøm (2000); Inácio y Llanos (2016)
	¿Cómo se sostiene la cooperación legislativa?	Disciplina partidaria; control de agenda; incentivos institucionales y distributivos	Figueiredo y Limongi (1999); Amorim Neto (2006); Raile, Pereira y Power (2011)
	¿Cómo se gestionan los conflictos intracoalición?	Cambios de gabinete; renegociación de acuerdos; uso estratégico de recursos presidenciales	Martínez-Gallardo (2012, 2014); Chaisty et al. (2021)
Supervivencia y ruptura	¿Cuándo y por qué se erosionan las coaliciones?	Crisis económicas; escándalos políticos; polarización ideológica; caída de popularidad presidencial	Pérez-Liñán (2007); Hochstetler (2006); Martínez-Gallardo (2014)
	¿Qué factores favorecen la supervivencia coalicional?	Institucionalización de acuerdos; proporcionalidad en distribución de cargos; mecanismos de coordinación	Amorim Neto (2006); Inácio y Llanos (2016); Chaisty et al. (2021)
	¿Qué significa la “muerte” de una coalición en presidencialismo?	Salida de socios del gabinete; reconfiguración de alianzas; transición a gobierno minoritario	Cheibub (2007); Chaisty et al. (2018); Pérez-Liñán (2007)

La primera etapa del ciclo —la formación— remite a la pregunta por qué y bajo qué condiciones los presidentes incorporan partidos al gabinete. La literatura sobre coaliciones en América Latina ha identificado como factores centrales a la fragmentación partidaria a nivel del Ejecutivo (Mainwaring 1999, Amorim Neto 2006, Chasquetti 2008), la distribución de poderes institucionales (Negretto 2006), la proximidad ideológica (Chasquetti 2001) y los incentivos que tienen los partidos para ingresar o no al gobierno (Strøm 1990). En sistemas multipartidistas donde los presidentes rara vez cuentan con mayoría propia, la construcción de coaliciones aparece como un mecanismo pertinente para viabilizar la agenda legislativa del gobierno (Amorim Neto 2006, Chasquetti 2001). No obstante, los estudios también muestran que la formación no responde exclusivamente a cálculos aritméticos; pues la influencia programática que persiguen los actores y la asignación estratégica de las carteras son igualmente relevantes (Araújo 2018; Batista 2018).

La segunda etapa —la gobernanza— se centra en lo que ocurre una vez que la coalición ha sido constituida. Aquí la literatura se desplaza hacia problemas de delegación, control y coordinación. Inspirados en los modelos desarrollados para los regímenes parlamentaristas (Laver y Shepsle 1996; Müller y Strøm 2000), diversos autores han examinado hasta qué punto los ministros actúan como agentes partidarios, cómo los presidentes centralizan la toma de decisiones y qué mecanismos permiten contener el conflicto intracoalición. En el contexto latinoamericano, el enfoque del “executive toolbox” (Raile, Pereira y Power 2011) ha mostrado cómo la combinación de cargos, recursos presupuestarios y control de agenda puede sostener la cooperación interpartidaria a lo largo del tiempo. Esta etapa revela con especial claridad la tensión que sufren los partidos miembros del gobierno entre los incentivos electorales y la responsabilidad gubernamental que emana del compromiso asumido.

La tercera etapa —la supervivencia o terminación— aborda las condiciones bajo las cuales las coaliciones se erosionan, se reconfiguran o colapsan. Mientras que en la literatura parlamentarista la duración del gabinete ha sido modelada mediante enfoques de “survival analysis” (Diermeier y Stevenson 1999), en América Latina el foco se entrelaza con estudios sobre crisis presidenciales e interrupciones del mandato (Pérez-Liñán 2007). Crisis económicas, escándalos de corrupción y polarización ideológica alteran los incentivos de permanencia de los socios. Al mismo tiempo, la capacidad institucional del presidente y los mecanismos de coordinación establecidos en la etapa de formación pueden mitigar estos riesgos, generando trayectorias divergentes de estabilidad o ruptura.

En conjunto, la literatura ha avanzado considerablemente en el análisis de cada una de estas etapas por separado, pero aún enfrenta desafíos importantes. Entre ellos destacan la necesidad de integrar explicaciones estáticas y dinámicas, superar el sesgo hacia ciertos casos —especialmente Brasil— y articular más estrechamente los estudios sobre coaliciones con la literatura de estabilidad presidencial y diseño institucional comparado.

El capítulo se organiza en tres secciones referidas al ciclo de vida de las coaliciones gubernamentales, ofreciendo una revisión sistemática del estado del conocimiento en cada una de ellas. Más que proponer una teoría unificada, el objetivo es mapear los principales debates, identificar convergencias y tensiones analíticas, y señalar áreas donde la investigación futura puede contribuir a una comprensión más integrada del fenómeno.

En suma, el capítulo pretende demostrar que las coaliciones presidenciales no deben ser entendidas únicamente como arreglos instrumentales de reparto de cargos, sino como estructuras políticas complejas cuya génesis, funcionamiento y duración están profundamente condicionadas por la interacción entre instituciones, partidos y contextos políticos cambiantes.

1. Formación de las coaliciones presidenciales

La primera etapa del ciclo de vida de las coaliciones presidenciales refiere a su formación. En términos analíticos, la pregunta central es por qué los presidentes deciden incorporar partidos al gabinete y bajo qué condiciones institucionales y políticas estas coaliciones emergen.

Durante mucho tiempo, la literatura comparada asumió que el presidencialismo tendía a producir gobiernos unipartidarios o gobiernos divididos que obligaban a los partidos a cooperar, negociar y regular el conflicto. Sin embargo, la tesis de Juan J. Linz (1990) sobre los fallos del presidencialismo y la supuesta superioridad del parlamentarismo, modificó la forma de comprender su funcionamiento institucional y sus implicancias para la supervivencia de la democracia. La reacción inicial de los defensores del presidencialismo fue destacar la influencia de los sistemas de partidos pues los ejemplos de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Uruguay, mostraban que el régimen de gobierno podía subsistir con bajos niveles de fragmentación. El problema para la democracia era la difícil combinación del presidencialismo y el multipartidismo (Mainwaring 1993; Mainwaring y Shugart 1997).

Mientras la ciencia política desarrollaba ese debate, la evidencia empírica mostraba que en algunos países latinoamericanos los presidentes construían coaliciones multipartidarias estables, incorporando a partidos aliados en el gabinete y distribuyendo recursos políticos con el objetivo de asegurar apoyo legislativo. Este patrón fue conceptualizado inicialmente en el caso brasileño como “presidencialismo de coalición” (Abranches 1988), y posteriormente desarrollado en estudios comparados que mostraron la recurrencia de este tipo de arreglos institucionales en sistemas multipartidistas (Amorim Neto 2006; Chaisty, Cheeseman y Power 2018). De esta forma, el problema para la estabilidad de la democracia presidencialista pasó a ser el aumento de la fragmentación partidaria

combinado con la incapacidad de los líderes para formar coaliciones estables de gobierno (Chasquetti 2008).

La formación de una coalición de gobierno puede ser interpretada como una respuesta estratégica a la fragmentación del sistema en el poder legislativo. Cuando el partido del presidente no controla una mayoría en las cámaras, la incorporación de socios al gabinete permite transformar apoyos legislativos inciertos en acuerdos más duraderos. Mientras Amorim Neto (2006) muestra que los presidentes minoritarios utilizan la distribución de carteras ministeriales como mecanismo para inducir disciplina legislativa, Cheibub (2007) señala que los gobiernos minoritarios cuentan con incentivos significativos para construir coaliciones cuando necesitan aprobar una agenda legislativa ambiciosa.

En términos más generales, la literatura reciente ha destacado que la formación de coaliciones presidenciales depende de la interacción entre tres conjuntos de factores: la estructura del sistema de partidos, los poderes institucionales del Ejecutivo y las motivaciones estratégicas de los partidos políticos. La fragmentación legislativa y la polarización ideológica afectan el conjunto de coaliciones posibles; los poderes presidenciales —como el control de agenda, el poder de decreto, el veto o la capacidad de nombramientos— condicionan la capacidad negociadora del presidente; y los partidos aliados evalúan simultáneamente los beneficios de acceder al gobierno, la influencia programática que pueden obtener y los costos electorales asociados a compartir responsabilidad gubernamental (Strøm 1990; Chaisty, Cheeseman y Power 2021).

La importancia de la fragmentación legislativa puede observarse claramente en varios países de la región. En Brasil, los presidentes enfrentan uno de los sistemas partidarios más fragmentados del mundo, lo que ha llevado a la creación de amplias coaliciones multipartidarias en el Ejecutivo desde la redemocratización (Amorim Neto 2006; Chaisty, Cheeseman y Power 2021). En Chile, en cambio, las coaliciones de gobierno se estructuraron históricamente a partir de alianzas electorales relativamente estables — como la Concertación y posteriormente la Nueva Mayoría— que facilitaron la coordinación entre partidos aliados dentro del gabinete (Siavelis 2002; Alemán y Saiegh 2007). Uruguay representa un caso intermedio: aunque el sistema de partidos es menos fragmentado que el brasileño, los presidentes también han recurrido a coaliciones multipartidarias, particularmente desde el surgimiento del Frente Amplio como fuerza dominante y la posterior formación de coaliciones opositoras en el período reciente (Buquet y Chasquetti 2008).

Motivaciones de los partidos: cargos, políticas y votos

Un segundo eje de la literatura sobre formación de coaliciones está centrado en las motivaciones que llevan a los partidos a integrarse en el gobierno. Siguiendo una tradición analítica desarrollada inicialmente para el estudio de coaliciones parlamentarias, muchos trabajos distinguen entre partidos orientados a cargos (*office-seeking*), a políticas públicas (*policy-seeking*) o a beneficios electorales (*vote-seeking*) (Strøm 1990). Estas motivaciones no son excluyentes, sino que coexisten y se combinan de manera variable según el contexto político.

En el presidencialismo latinoamericano, la dimensión distributiva ha ocupado un lugar central en las explicaciones sobre formación de coaliciones. Diversos estudios muestran que la distribución de ministerios constituye un instrumento fundamental para asegurar la cooperación de los actores de gobierno en la arena legislativa. Amorim Neto (2006) encuentra que los presidentes brasileños tienden a asignar carteras ministeriales de forma aproximadamente proporcional al peso legislativo de los partidos aliados, reproduciendo un patrón similar al observado en los sistemas parlamentarios. Investigaciones posteriores han refinado esta perspectiva mostrando que no sólo importa la cantidad de ministerios asignados, sino también su relevancia política y administrativa (Batista 2018). Lo mismo ocurre con los presidentes uruguayos que cualquiera fuera su ideología han optado por asignar las carteras siguiendo un patrón de justicia distributiva basado en el peso legislativo de cada socio de gobierno (Chasquetti y Buquet 2018).

No obstante, reducir la formación de coaliciones a un simple intercambio de cargos sería insuficiente. Una línea creciente de investigación enfatiza la dimensión programática de estos acuerdos pues los partidos no sólo buscan acceder al gobierno, sino también influir en el contenido de las políticas públicas. Araújo (2018), por ejemplo, encuentra evidencia de que los partidos tienden a ingresar a coaliciones cuando esperan obtener influencia significativa sobre la agenda legislativa o sobre áreas específicas de política pública. Desde esta perspectiva, los ministerios son concebidos como instrumentos de control programático además de representar recompensas de tipo distributivo.

Instituciones, negociación y estructura del gabinete

Un tercer enfoque dentro de la literatura comparativa examina cómo las instituciones moldean el proceso de negociación coalicional. A diferencia de los sistemas parlamentarios, donde la formación de gobierno suele ser el resultado de negociaciones explícitas entre partidos tras conocerse el resultado electoral, en los sistemas presidenciales el mandatario electo desempeña el papel central como formador de gobierno. Esto le otorga una ventaja estratégica en la negociación, aunque dicha ventaja puede verse limitada por la estructura del sistema de partidos y por la necesidad de construir mayorías legislativas.

Los presidentes disponen además de instrumentos institucionales que pueden influir en el proceso de formación de coaliciones. La capacidad de diseñar la estructura del gabinete —crear o eliminar ministerios, redefinir competencias administrativas o asignar áreas estratégicas a aliados— constituye un recurso importante para facilitar acuerdos interpartidarios. En este sentido, la formación de coaliciones no se limita a la distribución de ministerios existentes, sino que también implica decisiones organizacionales que redefinen la arquitectura del Ejecutivo (Inácio 2013).

Asimismo, investigaciones recientes han subrayado que la formación de las coaliciones debe entenderse como el primer momento de un proceso más amplio de gobernanza coalicional. Los acuerdos alcanzados durante la negociación inicial —incluyendo la distribución de carteras, la definición de prioridades políticas y los mecanismos de coordinación interpartidaria— tienden a influir de manera significativa en el funcionamiento posterior de la coalición. En otras palabras, la manera en que una coalición se constituye condiciona su capacidad para gestionar conflictos y sostener la cooperación entre los socios a lo largo del tiempo.

Por tanto, la literatura sobre formación de coaliciones presidenciales ha identificado una combinación de factores institucionales, estratégicos y programáticos que explican por qué los presidentes incorporan partidos al gabinete. La fragmentación legislativa crea incentivos estructurales para la cooperación; los recursos distributivos del Ejecutivo facilitan la negociación interpartidaria; y las expectativas de influencia política motivan a los partidos a integrarse en el gobierno. Sin embargo, la formación de una coalición de gobierno no es simplemente un evento inicial, sino el punto de partida de una relación política que deberá ser administrada durante todo el ciclo de vida de la coalición.

2. La gobernanza de las coaliciones presidenciales

Aunque la literatura sobre formación de coaliciones ha avanzado considerablemente en la identificación de los factores que llevan a los presidentes a incorporar socios al gabinete, comprender el nacimiento de la coalición constituye sólo el primer paso para analizar su dinámica política. Una vez constituida, la coalición enfrenta desafíos permanentes de coordinación, delegación y control que determinan su capacidad para producir decisiones colectivas y sostener la cooperación entre actores con preferencias potencialmente divergentes. La segunda etapa del ciclo de vida de las coaliciones presidenciales se centra precisamente en esta dimensión: cómo funcionan las coaliciones una vez establecidas y qué mecanismos institucionales permiten gestionar las tensiones inherentes a la cooperación interpartidaria en el Ejecutivo.

Delegación y control en el Ejecutivo

Una vez formada la coalición, el desafío central consiste en transformar el acuerdo inicial en una estructura de gobierno capaz de producir decisiones colectivas. Esta etapa introduce problemas clásicos de delegación y control, derivados del hecho de que los partidos aliados poseen preferencias políticas propias y mantienen incentivos electorales autónomos. En este contexto, los ministerios funcionan simultáneamente como arenas de cooperación y como potenciales focos de conflicto.

Gran parte de la literatura sobre gobernanza coalicional se ha inspirado en modelos desarrollados originalmente para sistemas parlamentarios. El enfoque de delegación ministerial propuesto por Laver y Shepsle (1996) sostiene que los partidos utilizan el control de ministerios específicos para influir en la política pública dentro de sus áreas de competencia. Aunque este modelo fue concebido para gobiernos parlamentarios, diversos estudios han explorado su aplicabilidad al presidencialismo latinoamericano, sugiriendo que los ministros que no pertenecen al partido del presidente pueden actuar como representantes de las preferencias programáticas de sus propias organizaciones políticas lo cual puede suponer un apartamiento de los objetivos inicialmente trazados.

Sin embargo, la lógica presidencial introduce una diferencia crucial: el presidente mantiene un rol central en la supervisión y coordinación de la acción gubernamental lo cual genera una relación evidentemente compleja con sus socios. La inclusión de vice-

ministros del partido del presidente en los ministerios a cargo de sus socios, es una estrategia que han desarrollado muchos presidentes brasileños (Pereira et.al. 2017). Los partidos aliados por su parte pueden utilizar a las comisiones del poder legislativo (Inácio y Rezende 2015) o a la solicitud de información -preguntas escritas por los legisladores- (Silva y Medina 2023) como mecanismos de control sobre la gestión de los ministros que pertenecen al partido del presidente. Como señalan Müller y Strøm (2000), el dilema de delegar autoridad política y administrativa y al mismo tiempo pretender controla los desempeños suele ser un dilema central de la gobernanza en coaliciones multipartidarias.

Coordinación intracoalición y organización del Ejecutivo

Un segundo eje de investigación se ha concentrado en los mecanismos institucionales que permiten coordinar la acción de los distintos partidos dentro del gobierno. En el contexto latinoamericano, estos mecanismos incluyen tanto arreglos formales —como comités de coordinación interpartidaria o acuerdos programáticos— como estructuras organizacionales dentro de la presidencia.

Diversos estudios han subrayado la importancia de la llamada “presidencia institucional” como instancia de coordinación política. Inácio y Llanos (2016) muestran que la estructura organizativa del entorno presidencial —incluyendo oficinas de coordinación política, asesores legislativos y unidades de seguimiento de políticas públicas— puede desempeñar un papel clave en la gestión de coaliciones multipartidarias. Estas estructuras facilitan la circulación de información, permiten anticipar conflictos entre socios y proporcionan al presidente herramientas para negociar soluciones antes de que las tensiones escalen.

La coordinación intracoalición también se ve influida por la distribución de recursos institucionales y presupuestarios. El enfoque del “executive toolbox” desarrollado por Raile, Pereira y Power (2011) destaca que los presidentes disponen de múltiples instrumentos para construir y sostener el apoyo legislativo, incluyendo la asignación de cargos administrativos, la distribución de recursos presupuestarios y el control de la agenda legislativa. Estos recursos permiten al Ejecutivo reforzar la cooperación interpartidaria, condicionar a sus socios y gestionar los conflictos dentro de la coalición.

Disciplina legislativa y producción de mayorías

La eficacia de una coalición gubernamental se manifiesta en última instancia en su capacidad para producir mayorías legislativas estables. Por esta razón, una parte importante de la literatura ha analizado la relación entre coaliciones de gabinete y comportamiento legislativo (Strom 1990, Chaisty, Cheeseman y Power 2021).

El caso brasileño ha sido particularmente influyente en este debate. Figueiredo y Limongi (1999) argumentan que, a pesar de la fragmentación partidaria, la organización institucional del Congreso y el control de la agenda por parte del Ejecutivo permiten generar altos niveles de disciplina partidaria en las votaciones legislativas. En este contexto, la inclusión de partidos en el gabinete fortalece los incentivos de cooperación, ya que los legisladores de los partidos aliados tienen intereses directos en el éxito del gobierno.

Investigaciones posteriores han ampliado este argumento mostrando que la disciplina legislativa en coaliciones presidenciales depende no sólo de la distribución de ministerios, sino también de la capacidad del Ejecutivo para articular incentivos políticos y materiales que refuercen la cohesión interpartidaria (Amorim Neto 2006; Raile, Pereira y Power 2011). Así, la gobernanza coalicional implica un equilibrio delicado entre delegación de autoridad a los socios y mecanismos de control que aseguren la cooperación sostenida.

Conflicto y gestión de tensiones intracoalición

A pesar de los mecanismos de coordinación que se suelen establecer, las coaliciones gubernamentales enfrentan inevitablemente tensiones internas. Los partidos aliados compiten entre sí en el plano electoral y poseen agendas programáticas que no siempre son compatibles. La gobernanza de las coaliciones implica, por lo tanto, una gestión permanente de los conflictos latentes entre los socios.

Una estrategia frecuente utilizada por los presidentes consiste en recurrir a cambios de gabinete para recalibrar el equilibrio político dentro del gobierno. Martínez-Gallardo (2012, 2014) muestra que la rotación ministerial puede funcionar como un instrumento para resolver disputas intracoalición, responder a presiones políticas externas o ajustar la composición del gabinete a nuevas circunstancias legislativas.

En este sentido, los cambios ministeriales no deben interpretarse necesariamente como señales de inestabilidad gubernamental, pues en muchos casos constituyen mecanismos adaptativos con el fin de mantener la cooperación entre partidos aliados a pesar de la presencia de conflictos. De esta forma, la gobernanza de coaliciones implica la combinación de negociación continua, ajuste institucional y gestión estratégica de recursos políticos.

La gobernanza de coaliciones también presenta variaciones importantes entre países. En Brasil, el control presidencial sobre la agenda legislativa y la distribución de cargos ministeriales y administrativos ha sido fundamental para sostener la cohesión legislativa de las coaliciones (Figueiredo y Limongi 1999; Raile, Pereira y Power 2011). En Chile, por el contrario, la coordinación intracoalición se apoyó más fuertemente en acuerdos programáticos y en mecanismos partidarios de resolución de conflictos como bien lo describe Siavelis (2002). En Uruguay, los estudios sobre el funcionamiento del gabinete han mostrado que la cooperación interpartidaria depende tanto de la distribución de ministerios como de la existencia de mecanismos de coordinación política entre los líderes de los partidos aliados (Chasquetti 2011).

En suma, la literatura sobre gobernanza de coaliciones en regímenes presidencialistas ha puesto de relieve que la estabilidad de estos acuerdos depende de la capacidad del Ejecutivo para gestionar simultáneamente cooperación y conflicto entre partidos aliados. Los mecanismos de delegación ministerial, las estructuras de coordinación presidencial y el uso estratégico de recursos institucionales constituyen elementos centrales para sostener la cohesión coalicional. No obstante, incluso coaliciones bien organizadas enfrentan tensiones derivadas de shocks políticos, cambios en el contexto económico o incentivos electorales divergentes. Estas dinámicas conducen a la tercera etapa del ciclo de vida coalicional: la supervivencia y eventual ruptura de las coaliciones de gobierno.

3. Supervivencia y ruptura de las coaliciones presidenciales

La tercera etapa del ciclo de vida coalicional refiere a la supervivencia y eventual terminación del arreglo interpartidario. En sistemas parlamentarios, la terminación de la coalición suele traducirse en el fin del gabinete y, frecuentemente, en un nuevo proceso de formación; por ello, buena parte de la literatura clásica estudia la “duración de gabinetes” como variable dependiente privilegiada (véase la estructuración por etapas en

Bergman, Bäck y Hellström 2021). En el presidencialismo, en cambio, el desenlace es conceptualmente más complejo: una coalición puede “morir” sin que el presidente abandone el cargo debido al mandato fijo establecido en la constitución. La ruptura puede adoptar formas graduales —salida de uno o más socios del gabinete, pérdida de coordinación legislativa, fragmentación de la agenda— o formas abruptas que, en casos extremos, se conectan con crisis ejecutivas e interrupciones del mandato.

Esta distinción obliga a precisar al menos tres resultados posibles: (i) terminación de la coalición (cambio en la composición partidaria del gabinete o fin del acuerdo interpartidario), (ii) debilitamiento funcional (pérdida de disciplina o cooperación legislativa sin cambios formales inmediatos), y (iii) crisis presidencial (incluyendo destitución o renuncia), donde la ruptura coalicional puede ser causa, síntoma o mecanismo acelerador. En esta clave, la literatura sobre gobiernos minoritarios y coaliciones en regímenes presidencialistas destaca que perder socios puede llevar al presidente a gobernar con apoyos ad hoc, con mayor incertidumbre y mayores costos de transacción (Cheibub 2007), mientras que la literatura sobre crisis presidenciales muestra que la erosión del apoyo legislativo suele anteceder episodios de inestabilidad severa (Hochstetler 2006; Pérez-Liñán 2007).

Explicaciones “estructurales”: apoyo legislativo, fragmentación y asimetrías internas

Una primera familia de explicaciones enfatiza factores estructurales que condicionan el funcionamiento y la extensión en el tiempo de la coalición. El número de integrantes de la coalición constituye un primer factor a considerar. Cuanto más dependiente sea el presidente de múltiples socios para construir mayoría, más puntos de veto y más oportunidades de conflicto intracoalición se abren. Sistemas altamente fragmentados incrementan la complejidad de la coordinación, elevan los costos de sostener acuerdos y aumentan el poder de chantaje de los partidos en situación de pivot. En esta línea, la estructura del sistema de partidos (fragmentación, disciplina, polarización) afecta el conjunto de coaliciones viables y la estabilidad del acuerdo interpartidario (Mainwaring 1993; Mainwaring 1999).

La literatura sobre presidencialismo coalicional también subraya que la supervivencia de la coalición puede depender de la asimetría de poder entre el presidente y sus socios.

Coaliciones con una presidencia institucionalmente dominante pueden ser más estables si el Ejecutivo posee capacidad para disciplinar y coordinar, pero también pueden ser más frágiles si los socios perciben bajo retorno político o poca influencia real en las políticas que despliega el gobierno. Chaisty, Cheeseman y Power (2018, 2021) sistematizan esta intuición: los presidentes minoritarios pueden sostener cooperación mediante un “toolbox” de instrumentos institucionales (agenda, recursos, nombramientos), pero la efectividad de esas herramientas depende de la estructura partidaria y del contexto político.

Otro factor relevante puede ser la dispersión ideológica de la coalición que no solo origina preferencias distantes a la hora de la formulación y el diseño de la política pública, sino que también provoca desconfianza respecto a la influencia que los demás actores tienen sobre el presidente. Coaliciones ideológicamente compactas y conectadas (Axelrod 1970) favorecen los procesos de gobierno, moderan los conflictos y garantizan la supervivencia del acuerdo coalicional (Chasquetti 2008).

Shocks y contingencias: economía, escándalos y popularidad presidencial

Una segunda familia de explicaciones pone el foco en shocks contingentes que alteran los incentivos de permanencia. La emergencia de crisis económicas, los escándalos de corrupción, las protestas masivas o las caídas pronunciadas de la popularidad presidencial cambian el cálculo de los socios sobre el valor esperado de permanecer en la coalición. El argumento es que, ante un deterioro del entorno, aumenta el rédito que proporciona la salida. Romper con la coalición puede ser electoralmente más rentable que compartir los costos de gobierno. La ruptura de la coalición de gobierno del presidente Batlle en Uruguay en octubre de 2002, responde típicamente a esta clase de incentivos. La crisis económica que afectó al país en ese año derrumbó rápidamente la popularidad del presidente, por lo cual el Partido Nacional, único socio de gobierno, decidió dejar los ministerios para evitar asumir los costos políticos que generaría enfrentar esa situación. La elección presidencial realizada dos años después confirmaría lo acertada que fue esa decisión. Mientras el partido del presidente perdió dos tercios de su electorado, el Partido Nacional incrementó su votación en más de diez puntos porcentuales (Chasquetti y Garcé 2005).

En América Latina, este punto conecta de manera natural la literatura sobre coaliciones con la literatura sobre crisis ejecutivas. Hochstetler (2006) muestra que la movilización y la presión política pueden impulsar desenlaces críticos, mientras que Pérez-Liñán (2007) subraya que los presidentes son más vulnerables cuando se combinan escándalos públicos, deterioro de la economía y pérdida del apoyo legislativo. La contribución específica para el análisis coalicional es que estos shocks no operan en el vacío: tienden a activar tensiones latentes y redistribuir el poder de negociación dentro de la coalición, precipitando salidas ministeriales o reconfiguraciones del gabinete.

Dinámica electoral: diferenciación, competencia y horizonte de gobierno

Una tercera línea destaca el rol del ciclo electoral. Incluso coaliciones que nacen con acuerdos relativamente claros enfrentan un problema dinámico: los partidos aliados cooperan para gobernar, pero compiten por votos y posiciones futuras. Conforme se acercan las elecciones, los incentivos a diferenciarse aumentan, especialmente si la popularidad presidencial cae o si los socios ven oportunidades competitivas autónomas. La ruptura de la coalición de Fernando Henrique Cardoso en 2002 puede explicarse por estos factores ya que el candidato del Partido del Frente Liberal, el ex presidente, José Sarney era el candidato mejor posicionado para competir con Lula da Silva en las presidenciales de ese año, pero el gobierno realizó un operativo policial contra su hija Rossana, acusada de corrupción, y brindó la excusa perfecta para romper un acuerdo político que había sobrevivido siete años.

En coaliciones presidenciales, la dinámica electoral se manifiesta tanto en el gabinete como en el Poder Legislativo. Mayor indisciplina, conflictos públicos más visibles y redefiniciones estratégicas del posicionamiento partidario. En casos de coaliciones preelectorales, además, la tensión puede expresarse como disputa por liderazgo, control de agenda y apropiación del crédito político.

Mecanismos de institucionalización, coordinación y “enforcement”

Finalmente, una cuarta familia de trabajos se concentra en los factores que contribuyen a la supervivencia de la coalición. Aquí la pregunta no es por qué se rompe, sino cómo se amortiguan los conflictos. Al respecto, la literatura sugiere tres mecanismos recurrentes:

Arquitectura organizacional y coordinación presidencial. La presencia de estructuras de coordinación (en torno a la presidencia, gabinetes políticos, mesas interpartidarias) reduce incertidumbre y facilita resolución de disputas. El enfoque de “presidencia institucional” sostiene que las capacidades organizacionales del Ejecutivo pueden ser cruciales para administrar las tensiones de una coalición multipartidaria (Inácio y Llanos 2016).

Recursos e instrumentos para sostener cooperación. El “executive toolbox” contribuye a favorecer la cooperación a partir del correcto uso de las designaciones cargos, las asignaciones de recursos presupuestarios y el control de la agenda (Raile, Pereira y Power 2011). Estos instrumentos funcionan tanto como incentivos selectivos como mecanismos de control.

Diseño del acuerdo inicial. Como se dijo antes, la forma en cómo se configura el acuerdo en la etapa de formación condiciona la gobernanza y, por ende, la supervivencia. Esta es precisamente la intuición central del enfoque por etapas: lo que se negocia al nacer impacta cómo se gobierna y cuánto dura (una idea explícita en el planteo de “tres fases” del ciclo de vida).

Asimismo, la duración de las coaliciones presidenciales también varía considerablemente entre países lo cual puede ser explicado por la influencia de factores de contextos. En Brasil, las coaliciones tienden a experimentar cambios frecuentes en la composición del gabinete, reflejando la necesidad de recalibrar alianzas en un sistema altamente fragmentado (Martínez-Gallardo 2014). En Chile, las coaliciones han sido históricamente más estables debido a la existencia de un sistema electoral que permite la presentación de alianzas electorales consolidadas. En contraste, episodios de ruptura de coaliciones en países como Colombia o Ecuador muestran cómo los sucesos no previstos, como las crisis políticas o los escándalos de corrupción, pueden alterar rápidamente los incentivos de cooperación entre partidos aliados (Pérez-Liñán 2007).

En suma, la literatura sobre supervivencia y ruptura de coaliciones presidenciales sugiere que la “muerte” coalicional es, con frecuencia, un proceso gradual de erosión y reconfiguración más que un evento único. Explicaciones estructurales (fragmentación, asimetrías internas), contingencias (economía, escándalos, protestas), dinámicas electorales y mecanismos de coordinación se combinan para producir trayectorias divergentes de estabilidad o ruptura. Al mismo tiempo, la especificidad del presidencialismo obliga a integrar el análisis coalicional con los estudios sobre estabilidad presidencial y crisis ejecutivas: la ruptura de una coalición puede ser compatible con la

supervivencia del presidente, pero también puede incrementar su vulnerabilidad en contextos de alta conflictividad política.

Conclusión: hacia una agenda de investigación sobre las coaliciones presidenciales

El estudio de las coaliciones presidenciales en América Latina ha experimentado una expansión notable desde la década de 1990. Lo que inicialmente aparecía como una aparente anomalía institucional —la existencia de gobiernos multipartidarios en sistemas presidenciales— pasó a ser interpretado como un rasgo estructural de democracias caracterizadas por altos niveles de fragmentación partidaria y por la frecuente ausencia de mayorías legislativas presidenciales. A partir de este reconocimiento, la literatura desarrolló un conjunto amplio de explicaciones sobre la formación, el funcionamiento y la supervivencia de coaliciones de gobierno.

Este capítulo organizó ese cuerpo de conocimiento a partir de la noción de ciclo de vida de las coaliciones presidenciales, distinguiendo tres etapas analíticamente vinculadas: formación, gobernanza y terminación. La revisión mostró que la literatura ha generado avances importantes en cada una de estas dimensiones, aunque de manera desigual.

Los estudios sobre formación de coaliciones han enfatizado el papel de la fragmentación legislativa, los incentivos institucionales del presidencialismo y la distribución de recursos políticos como factores centrales que explican la incorporación de partidos al gabinete (Mainwaring 1993; Amorim Neto 2006; Cheibub 2007). En contextos multipartidistas, la formación de coaliciones aparece como una estrategia para transformar apoyos legislativos inciertos en acuerdos relativamente estables. Al mismo tiempo, investigaciones recientes han destacado que las motivaciones de los partidos no se reducen a la búsqueda de cargos, sino que incluyen también objetivos programáticos y electorales (Strøm 1990; Araújo 2018).

La literatura sobre gobernanza de coaliciones ha desplazado el foco hacia los problemas de coordinación y delegación que emergen una vez constituido el gobierno. En esta etapa, la cooperación interpartidaria depende de la interacción entre la delegación ministerial, los mecanismos de coordinación intracoalición y la capacidad del presidente para utilizar recursos institucionales que sostengan la disciplina legislativa (Laver y Shepsle 1996; Raile, Pereira y Power 2011; Inácio y Llanos 2016). Estos estudios han mostrado que las

coaliciones no son arreglos estáticos, sino estructuras dinámicas que requieren negociación y adaptación permanentes.

Finalmente, la literatura sobre supervivencia y ruptura ha puesto de relieve la importancia de shocks políticos y económicos, dinámicas electorales y conflictos intracoalición en la duración de los acuerdos de gobierno (Hochstetler 2006; Pérez-Liñán 2007). A diferencia del parlamentarismo, la ruptura de una coalición en presidencialismo no implica necesariamente la caída del gobierno, lo que obliga a distinguir entre estabilidad presidencial y estabilidad coalicional. Esta especificidad institucional introduce complejidades analíticas que aún no han sido plenamente incorporadas en los modelos explicativos existentes.

A pesar de estos avances, la revisión también revela varias limitaciones en el desarrollo del campo. En primer lugar, gran parte de la literatura se ha concentrado en el estudio de la formación de coaliciones, mientras que las dinámicas de gobernanza y ruptura han recibido menor atención sistemática. Esta asimetría ha contribuido a una comprensión fragmentada del fenómeno, en la que los estudios tienden a analizar episodios específicos —como la negociación inicial o la salida de socios del gabinete— sin integrarlos dentro de una misma secuencia analítica.

En segundo lugar, existe un sesgo empírico importante hacia ciertos casos, particularmente Brasil. Si bien este país ofrece un laboratorio institucional privilegiado para estudiar el presidencialismo coalicional, la concentración excesiva en un número reducido de casos puede limitar la capacidad de generalización de los hallazgos. Una agenda comparativa más amplia que incluya experiencias diversas —como Chile, Uruguay, Colombia o Ecuador— permitiría evaluar con mayor precisión el alcance de las teorías existentes.

En tercer lugar, la literatura ha tendido a tratar la formación de coaliciones como un evento estático, sin explorar suficientemente la manera en que las condiciones iniciales del acuerdo influyen en su funcionamiento posterior. El enfoque del ciclo de vida sugiere precisamente que las decisiones tomadas durante la etapa de formación —como la distribución de ministerios, la institucionalización de mecanismos de coordinación o la definición de prioridades programáticas— pueden tener efectos duraderos sobre la estabilidad de la coalición.

En cuarto lugar, persiste una débil articulación entre los estudios sobre coaliciones presidenciales y la literatura sobre estabilidad presidencial y crisis ejecutivas. Integrar ambas agendas permitiría comprender mejor cómo las dinámicas intracoalición interactúan con factores más amplios del sistema político, como protestas sociales, escándalos de corrupción o cambios en la popularidad presidencial.

Estas limitaciones abren varias líneas prometedoras para la investigación futura. Una primera consiste en desarrollar modelos dinámicos de coaliciones presidenciales que integren las tres etapas del ciclo de vida. En lugar de tratar la formación, la gobernanza y la ruptura como fenómenos independientes, estos enfoques podrían analizar cómo las decisiones iniciales condicionan trayectorias posteriores de cooperación y conflicto.

Una segunda agenda se orienta hacia la construcción de bases de datos comparativas sobre coaliciones presidenciales, que permitan examinar sistemáticamente patrones de formación, cambios de gabinete y duración coalicional en un conjunto amplio de países y períodos.

Una tercera línea de investigación podría explorar con mayor profundidad la interacción entre coaliciones gubernamentales y competencia electoral, analizando cómo los incentivos electorales de los partidos aliados influyen en la estabilidad de los acuerdos de gobierno.

En conjunto, avanzar en estas direcciones contribuiría a superar la fragmentación existente en la literatura y a desarrollar una comprensión más integrada de las coaliciones presidenciales como instituciones políticas dinámicas. Más que simples arreglos de reparto de cargos, las coaliciones constituyen mecanismos centrales de gobernanza en democracias multipartidistas, cuyo estudio resulta indispensable para comprender el funcionamiento de los sistemas políticos latinoamericanos contemporáneos.

Bibliografía